

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

El veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **GUSTAVO FLÓREZ ARIAS** contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL** (en adelante UGPP), tramitado bajo el radicado único nacional No. 05001-31-05-002-2020-00046-01.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

#### 1. ANTECEDENTES:

El actor pretende con la presente demanda, que se declare que su cónyuge la fallecida Alba Gloria Arias, dejó causado el derecho a la pensión de sobreviviente, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, razón por la cual solicita que se condene a la UGPP al reconocimiento y pago de esta prestación a su favor, desde el momento de su fallecimiento de la causante ocurrido el 18 de diciembre de 1996, con intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio indexación y costas procesales.

**Como fundamento fáctico de las pretensiones**, en lo que interesa resolver a esta instancia, expone el demandante, que el 18 de diciembre de 1996 falleció la señora Alba Gloria Arias Herrera, quien era su cónyuge con quien convivió desde 1972 hasta el momento de su deceso, y de cuya unión nacieron dos hijos Luisa Fernanda y Jorge Andrés Flórez Arias.

Indica que, al momento del deceso, la causante tenía acreditadas 308 semanas de cotización sufragadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993; razón por la cual solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, prestación que le fue negada mediante resolución RDP 027650, con el argumento de que la causante debía acreditar 26 semanas en el año inmediatamente anterior a su deceso, sin embargo en la citada resolución le reconocieron la calidad de beneficiario, y le otorgaron una indemnización sustitutiva, la cual nunca fue reclamada.

## **2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del once (11) de agosto de 2020, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, ABSOLVIÓ a la UGPP del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, así como de todos los cargos formulados en su contra por el demandante, declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación, y se abstuvo de condenar en costas.

Sustentando el juez su decisión, indicando que en el presente caso la causante no dejó consolidados los requisitos de la norma vigente al momento de su deceso, esto es la Ley 100 de 1993, en su versión original, ya que la afiliada no se encontraba cotizando al sistema al momento de su muerte, no dejando consolidadas las 26 semanas en el año inmediatamente anterior al momento en que se produjo su deceso, teniendo en cuenta que la afiliada fallecida Alba Gloria Arias cotizó en el periodo comprendido del 1 de febrero de 1967 al 31 de enero de 1973; adicionalmente indicó el juez, que la causante nunca estuvo afiliada al ISS, por lo que el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, se aplicaba exclusivamente a trabajadores del sector privado, no a los del sector público, por lo cual no se le puede aplicar el principio de la condición más beneficiosa para otorgar la pensión con base en el referido Decreto.

## **3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

La anterior decisión fue apelada por el apoderado del demandante, argumentando que la asegurada fallecida sí realizó cotizaciones, conforme se desprende de la resolución, de la cual se puede inferir que sirvió a la Gobernación de Caldas en el periodo comprendido desde el 1 de febrero de 1964 hasta el 31 de enero de 1973, sin embargo, solo se le descontó para pensiones entre el 1 de febrero de 1967

hasta el 31 de enero de 1973 a través de la Caja Nacional de Previsión Social, lo que supone que hubo un tiempo servido con cotización y otro sin cotización, y que el tiempo servido sin cotización no le fue tenido en cuenta por parte de la UGPP al reconocerle la indemnización sustitutiva.

Expone que el demandante al considerar que tenía su derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, abordó todas las instancias asistiendo a todas las entidades, primero fue a la Gobernación de Caldas donde le indicaron que no tenía derecho a la pensión, al no haber dejado la causabiente cumplido el requisito de los 20 años de servicio, pues el tiempo de cotización en dicha entidad fue del 1 de febrero de 1964 hasta el 1 de febrero de 1967, pero que al cotizar de 1967 a 1973 el competente para dicho asunto era CAJANAL hoy liquidada y por ende se demanda a la UGPP entidad que expidió la Resolución RDP No. 027650 del 19 de junio de 2013, aportando su representado toda la documentación requerida, para que se analizará la pensión conforme al Sistema General de Pensiones, puesto que, al momento del fallecimiento de su cónyuge, se encontraba vigente la Ley 100 de 1993.

Continuó exponiendo que la UGPP le reconoció a su representado la indemnización sustitutiva, indicando que no era beneficiario de la pensión de sobrevivientes, ya que la causante no acreditó 26 semanas en el año anterior, o que estuviera afiliada al momento del deceso y hubiera acreditado 26 semanas en cualquier momento, sin embargo, si fueran ciertos los argumentos expuesto por la accionada, tampoco lo hubiese concedido la indemnización sustitutiva.

Resalta que, si al demandante se le reconoció como beneficiario de la indemnización sustitutiva, por medio del principio de la condición más beneficiosa se le tenía que reconocer era la pensión de sobrevivientes, dado que los argumentos para la indemnización sustitutiva aplican también para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, además que al demandante no le tuvieron en cuenta el tiempo sin cotización, solo le tuvieron en cuenta para la indemnización sustitutiva el tiempo con cotización, que comprende desde el año 1967 y 1973 equivalentes a 308 semanas.

Por lo que considera que se tuvo que haber analizado a la luz del Sistema General de Pensiones, incluso con la aplicación de la condición más beneficiosa, y que

aunque los periodos de cotización sean de tiempo público no significa que no hayan sido cotizados, puesto que si se encuentran cotizados, y lo que en realidad sucede es que la entidad encargada de reconocer la prestación no es la propia del sector privado, y que al ser la UGPP la entidad encargada, no significa que no se le daba dar aplicación al Sistema General de Pensiones, pues en el régimen de transición se le aplican unas condiciones y en lo demás se le aplica la Ley, y que al fallecer a la luz de la Ley 100 de 1993 tiene todas las prerrogativas para analizarse con la condición más beneficiosa al haber cotizado antes de la Ley 100 de 1993, 308 semanas y conforme al Decreto 758 y la Sentencia de la CSJ SL 11947 de 2020, donde se indica que se deben tener en cuenta todos los tiempos.

#### **4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, únicamente el apoderado de la UGPP allegó escrito de alegaciones, en los cuales señala resumidamente, que el Acto Administrativo demandado, conserva incólume su presunción de validez y surte plenamente sus efectos en el mundo jurídico, puesto que esta no ha sido desvirtuada por la demandante, toda vez que los mismos no contienen vicio alguno que conlleve a su anulación, ya que fueron expedidos por la autoridad competente, observando la ritualidad exigida para su creación y ejecutoria, tanto los motivos en los que se fundan como la motivación que en ellos se lee son consistentes y congruentes con las normas superiores en las que se erigen, por lo tanto los vicios que se le imputan carecen de fundamento de acuerdo a los preceptos de nuestro ordenamiento jurídico.

De conformidad con el artículo 161 del CPACA, quien pretende demandar la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto, deberá haber agotado la otrora conocida como vía gubernativa, más exactamente, haber interpuesto y sustentado en forma oportuna el recurso de apelación, veamos:

*Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:*

*2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.*

*Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.*

En consecuencia, se observa en el expediente que la parte demandante no interpuso el recurso de reposición frente al acto administrativo que negó la pensión, habiéndose dejado expresa constancia en los mismos de su procedencia, por lo tanto, no puede acudir a la jurisdicción para pretender su nulidad del mismo.

De acuerdo a la fecha de fallecimiento de la señora **ALBA GLORIA ARIAS HERRERA**, esto es el día 18 de diciembre 1996, se observa que la normatividad aplicable para decidir la Litis es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modifica el artículo 46 de la ley 100 de 1993.

Así las cosas, tenemos que al señor **GUSTAVO FLÓREZ ARIAS**, no le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes por cuanto el causante **ALBA GLORIA ARIAS HERRERA** no tuvo por lo menos 26 semanas de cotización con anterioridad al fallecimiento.

Por las razones anteriormente expuestas solicito respetuosamente al despacho confirmar la sentencia de primera instancia y en consecuencia, denegar todas las suplicas de la demanda presentada en contra de la entidad que represento.

## **5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:**

El problema jurídico a resolver en esta instancia se circunscribe a establecer, si la afiliada fallecida ALBA GLORIA ARIAS HERRERA, dejó consolidados los requisitos legales o jurisprudenciales para que sus beneficiarios adquirieran el derecho a la pensión de sobrevivientes, y en caso positivo determinar si el demandante ostenta la calidad de beneficiario de la pensión, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o la indexación.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

## **6. CONSIDERACIONES:**

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación presentado por la parte DEMANDANTE, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

Tratándose de pensiones de sobreviviente, la Sala de Casación Laboral de la CSJ ha sido enfático en determinar que la norma aplicable es la vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado, por lo que, en el caso que nos ocupa de acuerdo a la fecha del fallecimiento de la causante, esto es, el 18 de diciembre de 1.996, como se prueba con el registro civil de defunción inserto folio 27 del archivo 1. 05001310500220200004600, la norma legal que regula tal prestación es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su texto original, el cual establecía que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado fallecido, siempre que hubiere acreditado alguno de los siguientes requisitos:

- “...a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;*
- b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema. Hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte”*.

De acuerdo con ello, analizando la prueba que milita en la foliatura contentiva de los certificados salariales No.1 y No.3, y el certificado laboral, documentos visibles a folios 11 a 19 del archivo denominado **2. cd. fl. 29 expediente administrativo**, es claro que para el 18 de diciembre de 1996, la señora ARIAS HERRERA no se encontraba cotizando al sistema al haber efectuado su último aporte a la CAJANAL el 31 de enero de 1973, tal y como se advierte de los citados legajos, así que la causante no dejó consolidado el requisito de veintiséis (26) semanas dentro del último año inmediatamente anterior al fallecimiento, esto es, del 18 de diciembre de 1996 al 18 de diciembre de 1995, no contando para este lapso con las semanas exigidas legalmente para haber dejado causada la pensión de sobrevivientes, por lo que resulta indudable que bajo este presupuesto normativo no dejó causado el derecho reclamado, asistiéndole razón a apoderada de la UGPP en sus alegatos.

Ahora, en cuando a la solicitud de la parte actora que se le conceda la pretendida pensión con fundamento en la condición más beneficiosa, la Corte Constitucional y la CSJ (sentencias SL356-2019, SL763-2018, SL2183-2018, SL10013-2017, SL4080-2017, SL8614-2017, SL 2150-2017, SL8085-2015, SL6657-2015, SL6640-2015 y SL405-2013 entre otras) han desarrollado a partir del art. 53 de la Constitución Política para las pensiones de invalidez y sobrevivientes, el principio de la condición más beneficiosa, en virtud del cual se puede recurrir a normas anteriores a la vigente en la fecha de la invalidez o el deceso del causante de la pensión de sobrevivientes, que regulaba las citadas pensiones, si ellas resultan más favorables a los intereses de quien reclama la pensión frente a la vigente a la fecha del deceso del causante, pero bajo ciertos requisitos, en especial que el causante de la pensión para el caso de la pensión de sobrevivientes, haya estado afiliado al sistema pensional en vigencia de la Ley anterior que pretende se le aplique, y haya completado igualmente en vigencia de la Ley anterior, el número de semanas que se exigían para acceder a la pensión, pues se entiende que lo que protege el principio de la condición más beneficiosa es la aplicación de unos requisitos menos gravosos para obtener el derecho pensional, que ya se había cumplido en vigencia de la Ley derogada, sin que se haya previsto un régimen de transición.

Los regímenes pensionales anteriores a la ley 100 de 1993, eran diversos según se tratara de servidores públicos o trabajadores del sector privado, estos últimos con la posibilidad de afiliarse al extinto Instituto de Seguros Sociales, el que tenía legislación especial para otorgar las pensiones a sus afiliado y que solo aplicaban a estos. En el sector público existía una mayor diversidad de regímenes pensionales, pues si bien existía una legislación general, también existía legislación especial en algunas entidades.

En el Instituto de Seguros Sociales, la legislación inmediatamente anterior a la Ley 100 de 1993 que regulaba las pensiones de sobrevivientes era el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.

Así las cosas, encuentra este cuerpo colegiado que la afiliada fallecida, durante su vida laboral ostentó **la condición de empleada pública**, encontrando que, del material probatorio contentivo de los certificados salariales y laborales, además de la Resolución No. RDP 027650 del 19 de junio de 2013 emitida por la UGPP, que la asegurada prestó sus servicios a favor del DEPARTAMENTO DE CALDAS por el

entre el 1 de febrero de 1964 al 31 de enero de 1973, sin afiliación a ninguna Caja o entidad de seguridad social; y del 1 de febrero de 1967 al 31 de enero de 1973, el citado empleador efectuó aportes a favor de la Caja Nacional de Previsión Social “CAJANAL”, razón por la cual, la UGPP por el interregno citado con cotización, concedió al demandante la indemnización sustitutiva, en calidad de cónyuge supérstite (fls.17 a 23)

Respecto de la imposibilidad jurídica de aplicar las normas legales del ISS, a trabajadores no afiliados a este Instituto, se pronunció la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL12028-2016 de fecha agosto 10 de 2016, en los siguientes términos:

*“En ese contexto, de entrada advierte la Sala que no erró el Tribunal al dilucidar el asunto en controversia bajo la égida de los reglamentos de Caxdac vigentes a la fecha del deceso del causante, anteriores a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones previsto en la L.100/ 1993 y demás normas complementarias y reglamentarias, porque tal como tantas veces se ha reiterado, el otorgamiento de la prestación debe analizarse a la luz de las disposiciones vigentes a la fecha del infortunio, para el caso las leyes 1015/1956 y 32/1961 y en el D.R. 60/1993.*

*Ahora, la tesis que alega la censura según la cual la pensión de sobrevivientes prevista en el A. 224/1966, en situaciones anteriores a la L.100/1993, debe cobijar a todos los trabajadores particulares, sin importar si se encontraban o no afiliados al Seguro Social, no es de recibo, en la medida que esas disposiciones cubrían de manera exclusiva a sus afiliados o asegurados, bajo normas específicas y concretas establecidas en los reglamentos del ISS, no así a quienes se encontraban vinculados a otras cajas de seguridad social al amparo de otras disposiciones que algunas veces podían ser más flexibles y en otras más exigentes pero en todo caso diferentes, a cargo de entidades distintas, unas bajo reglas de cotizaciones y otras simplemente cimentadas en tiempos servidos, etc.”*

Igualmente, en la sentencia SL867 2020, de Radicación n.º 66920 del 10 de marzo de 2020, en la que se rememoró la sentencia CSJ SL4733-2018, la Corte señaló lo siguiente:

*“...De suerte que la situación jurídica concreta en tratándose del cambio legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, que es donde esta Sala ha venido admitiendo la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, presupone rigurosamente que quien pretenda ampararse con este principio haya estado afiliado **con anterioridad al tránsito normativo, al Instituto de Seguros Sociales** y tenga cumplido con las semanas que exigía el Acuerdo 049 de 1990, en los términos como lo ha explicado la jurisprudencia. Dicho en breve, es posible acceder al derecho pensional con amparo en la condición más beneficiosa, siempre y*



*cuando la persona hubiera estado afiliada al sistema anterior con el que aspira pensionarse, ya que no es admisible hacer derivar un derecho de una calidad que nunca se tuvo. Debe precisarse que dicho postulado, en este específico tránsito normativo, se aplica **hasta** la promulgación de la Ley 797 de 2003.*

*Esta sala en providencia CSJ SL, SL6470-2015, razonó:*

*De ahí que en este asunto, para que fuera viable acceder a la pensión deprecada en virtud del principio de la condición más beneficiosa con invocación del A. 049/1990, el **de cujus debió estar cobijado por tal normativa en algún momento de su vida laboral y además**, acreditar plenamente el requisito de número mínimo de semanas de cotización allí exigido, antes de la entrada en vigencia de la L. 100/1993, en los términos indicados por la jurisprudencia, pues sólo bajo tales supuestos se puede predicar la existencia de una expectativa legítima susceptible de protección. (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 40662)."*

Teniendo en cuenta lo anterior, concluye esta sala que cuando el causante nunca estuvo afiliado al ISS antes del tránsito legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, no es viable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, para aplicar el referido Acuerdo como de manera acertada lo explicó el a quo.

En el caso de los afiliados a CAJANAL, La norma anterior a la vigencia de la ley 100 de 1993 que regulaba la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional era el que se pidieran aplicar acudiendo al principio de la condición más beneficiosa sería Art. 11 de la Ley 71 de 1988, la que a la vez remitía a leyes anteriores al siguiente tenor:

**“Artículo 11 .-** Esta ley y las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de Previsión Social del Sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez.”

Las leyes relacionadas en la norma anterior, en esencia establecían el derecho a la pensión de sobrevivientes que se denominaba sustitución pensional, para el caso del trabajador fallecido que estaba pensionado como cuanto había adquirido el derecho a la pensión de jubilación, es decir que como la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988 aplicables a los empleados del sector público exigían veinte años de servicios, para tenerse derecho la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional

el causante debía contar con tal número de años de servicios para que sus beneficiarios pudieran acceder a esta prestación.

Para finalizar, el recurrente citó en su recurso la sentencia SL 11947 de 2020, la que no tiene cabida en el caso en estudio, por tratarse de situaciones jurídicas disímiles, ya que en la citada providencia se permitió la acumulación de los tiempos públicos servidos sin cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales con los aportes sufragados a esa entidad, con la finalidad de acreditar las exigencias de aportes previstas en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, tanto para la pensión de sobrevivientes como la de invalidez, cuando se invoque su aplicación en virtud del principio constitucional de la condición más beneficiosa, sin embargo, este no es el caso que se analiza en este litigio, en el que como ya se ha dicho, la asegurada únicamente tiene tiempo en el sector público sin cotización y con cotización a CAJANAL, sin haber estado afiliada nunca al ISS ni efectuado aportes durante su vida laboral a este Instituto, lo que llevará a desestimar este argumento.

En razón de lo anterior, esta Colegiatura coincide con los argumentos expuestos por el juez de primera instancia, cuanto concluyó que al pretensor no le son aplicables las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, bajo los presupuestos de la condición más beneficiosa, por no haber estado afiliada la causabiente en el Seguro Social, razón por la cual no le es exigible a la entidad demandada el reconocimiento de una prestación en virtud de un régimen al cual nunca perteneció.

Sin más consideraciones, se procederá a confirmar la absolución dispuesta por el *a quo*.

COSTAS en esta instancia a cargo del accionante y a favor de la UGPP. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

## **7. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN el 11 de agosto de 2020, en el presente proceso ordinario laboral promovido por **GUSTAVO FLÓREZ ARIAS** contra **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP**, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

**SEGUNDO:** COSTAS en esta instancia a cargo del accionante y a favor de COLPENSIONES. Las agencias en derecho, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes por EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados FRANCISCO ARANGO TORRES, JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ y HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, este último con quien se recompone la Sala, por impedimento aceptado al magistrado JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ.

Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Hugo Alexander Bedoya Diaz  
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional  
Sala 001 Laboral

**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6fb324644b655de5a8b684dabdc4c9730abfa4470dd1f36fc017c91e349a7ded**

Documento generado en 24/02/2023 04:05:10 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**